El INE se tocó. ¿Y ahora?

TELÓN DE FONDO

Edmundo Jacobo Molina

Exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE)

Opine usted:
opinion@elfinanciero.com.mx



En tiempos en los que la información se consume y desecha a una velocidad vertiginosa, resulta poco frecuente que una noticia permanezca durante semanas en el centro de la conversación pública.

Más excepcional aún es que trascienda los medios que originalmente la difundieron y se convierta en un asunto de preocupación nacional.

Eso es precisamente lo que está sucediendo con las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el Instituto Nacional Electoral.

Durante las últimas dos semanas, las revelaciones periodísticas han evidenciado un deterioro institucional que no se resolverá con cambios de funcionarios o declaraciones de buenas intenciones.

La dimensión que ha adquirido este asunto revela algo más profundo: el INE continúa siendo una institución especialmente apreciada para la sociedad mexicana, a pesar de que López Obrador trató de dinamitarla. No es casualidad; se trata de uno de los patrimonios públicos más importantes construidos durante décadas.

Conviene recordar lo ocurrido entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, cuando cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles, en la Ciudad de México y en numerosas ciudades del país y del extranjero, para defender la autonomía de la autoridad electoral, respaldar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y marchar por la democracia.

Aquellas manifestaciones tuvieron un significado que trascendió las diferencias partidistas; fueron expresiones de una ciudadanía consciente de que las instituciones democráticas no pertenecen a los gobiernos, a los partidos ni a quienes temporalmente las encabezan.

La consigna fue contundente: ¡El INE no se toca! Tan válida era esa proclama que, al tocarse, al volverse propiedad de unos, de un partido político, las consecuencias están a la vista.

No solamente por las presuntas irregularidades que deben investigarse y sancionarse. También porque se ha puesto de manifiesto la fragilidad de una institución cuando sus equilibrios internos se subordinan a la lógica de la concentración del poder y dejan de privar en sus resoluciones la legalidad, autonomía e independencia.

Lo sucedido en el INE no puede entenderse al margen de lo que ha ocurrido en el país. La progresiva concentración de atribuciones, el debilitamiento de los contrapesos y la reducción de los espacios de deliberación institucional forman parte de una misma concepción del ejercicio del poder.

Pero hoy el problema exige algo más que identificar responsabilidades. La pregunta fundamental es qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para recuperar una institución cuya función resulta indispensable para la convivencia democrática y civilizada.

Porque el INE no existe para dar satisfacción a una mayoría, proteger a una minoría o responder a las expectativas del gobierno. Su razón de ser es garantizar que todas las fuerzas políticas compitan bajo las mismas reglas, que cada voto tenga el mismo valor y que los resultados electorales sean reconocidos como expresión auténtica de la voluntad ciudadana.

En ello reside una condición esencial de la democracia, la igualdad de todos ante la ley. Sin una autoridad electoral independiente, profesional y confiable, no solamente se debilita la competencia política, también se compromete la legitimidad de quienes resultan electos, incluidos aquellos que hoy cuentan con mayorías suficientes para gobernar.

Esta es una reflexión que debería preocupar particularmente a los partidos políticos, sin excepción. Ninguno puede suponer que las condiciones actuales de poder serán permanentes. Las reglas que hoy se debilitan para favorecer a unos pueden convertirse mañana en instrumentos de exclusión para otros.

Por eso, recuperar al INE no puede ser una tarea de una sola fuerza política ni una bandera de confrontación entre oficialismo y oposición. Requiere asumir que existen bienes institucionales que deben permanecer por encima de la disputa por el poder.

Tampoco se trata de restaurar acríticamente el pasado. Las instituciones siempre son susceptibles de mejora, pero reformarlas exige fortalecer su autonomía, profesionalismo, transparencia y capacidad para garantizar derechos, no someterlas a intereses políticos coyunturales.

La ciudadanía se movilizó para impedir que se desmontaran conquistas democráticas construidas durante décadas. Hoy el desafío es todavía mayor: reconstruir la institucionalidad que ha sido debilitada y devolverle a la autoridad electoral la confianza que necesita para cumplir su mandato constitucional.

Esa reconstrucción exige investigaciones exhaustivas, responsabilidades claramente determinadas, recuperación de los contrapesos y, sobre todo, un compromiso político inequívoco con la independencia de las instituciones.

No es una tarea exclusiva de quienes integran el Consejo General, del Congreso o de los partidos; es también una responsabilidad ciudadana.

La democracia mexicana no puede resignarse a que sus instituciones se conviertan en extensiones del poder político; tampoco puede aceptar que su deterioro sea considerado irreversible.

Hace cuatro años, la sociedad salió a las calles para defender al INE. Hoy corresponde recuperar el sentido de aquella movilización, con una exigencia renovada: El INE no se toca, porque cuando se toca para subordinarlo al poder, se destruyen las garantías que justifican su existencia y, cuando esas garantías se pierden, perdemos todos.